

La teoría de Lurralde

(*Navarra Hoy*, 15-16. 01. 1991)

Quienes, en sus comunicados públicos, propugnan la democracia participativa no me negarán la merced del diálogo. Cierto que, para intentarlo con la Coordinadora Lurralde, habré de olvidar -con gran esfuerzo, desde luego- que otras varias de sus proclamas contradicen frontalmente su voluntad dialogante. Cuando en pleno verano pronosticaron con visible satisfacción que "ETA tiene capacidad de paralizar la autovía" (y, miren por dónde, han acertado estos profetas), olvidaron añadir que también es capaz de paralizar bastantes cerebros y muchas conciencias. Cuando hace unos días la espantada -que viene de "espanto"- de las empresas concesionarias les merece una valoración positiva, hemos de concluir que la amenaza a la vida ocupa un lugar de honor en el catálogo de valores de esta Coordinadora... Aun y todo, si quieren explicarse, aquí estamos cuanto gusten.

Y es que, mientras recurramos a la palabra, hay esperanza. Nunca se repara bastante en que, bajo cualquier enfrentamiento civil, se da también un combate de razones. No hay interés, ni siquiera el más rastrero, que pueda prescindir de un ropaje razonable, de alguna idea con la que pretende justificarse a los ojos de los demás. Y si ese interés mezquino ganase al fin la partida (como tantas veces sucede), le quedará al menos la humillación de haber perdido ante el público la verdad. ¿Será eso un logro desdeñable en una sociedad de seres racionales...?. Por desgracia, crece el número de los que procuran esquivar el debate teórico y refugiarse en el runrún autocomplaciente. Reacios a todo lo que suene a pensamiento, creyentes en que lo que cuenta es el poder efectivo y la habilidad de maniobra, suelen despreciar las ideas que no vayan acompañadas de fuerza (electoral, económica o militar). Como si ciertas ideas no ayudasen a descargar las armas, de igual modo que otras -lo estamos viendo- se bastan por sí solas para cargarlas.

Así que lo confesaré cuanto antes: me importa más combatir contra unas ideas que a favor de una carretera; por deficiente que ésta pudiera ser, mayor peligro resulta de aquéllas. Me refiero a las *ideas-clave* que la Coordinadora Lurralde tan arrogantemente pregona. No son tan complicadas, todo hay que decirlo.

1) En el litigio de la autovía, repiten, los Gobiernos respectivos han adoptado "la vía de la imposición". Lo que equivale a decir que sus adversarios (ETA y HB) se han limitado a seguir el camino de una modesta proposición... Pero si de verdaderas imposiciones se tratara en ambos lados, ¿es lo mismo imponerse por medio de la seducción, de razones convincentes, de los votos o de las armas?. Cualquiera de estos procedimientos ¿concede idéntico *derecho* que los demás al resultado impuesto?.

2) Arguyen después que frente a la mera "aritmética electoral" es preciso lograr "un mínimo consenso social" que respalde el proyecto en cuestión. Y bien, ¿acaso no ocurre aquí justamente lo contrario, que es máximo el consenso y mínimo el disenso?. No hay duda de que la simple proporción numérica entre los partidos no es suficiente, ni tampoco de que un intenso debate ciudadano hubiera arrojado probablemente un consenso algo menor. En cualquier caso, a la hora de la decisión resulta inevitable sumar y restar opiniones o votos. ¿O es que la Coordinadora, como es de temer, sólo conoce en su seno la unanimidad y acostumbra más bien a sus miembros a la adhesión incondicional?.

3) Su objetivo inmediato, dicen, es evitar "la violencia de uno u otro signo". He ahí de nuevo la falacia habitual que tan pacificadoras consecuencias tiene en nuestra tierra. ¿Quién les ha enseñado que la violencia de un signo es equivalente a la violencia de otro?. Cuando les roban la cartera, ¿impiden la violencia del policía al detener al ladrón o la del juez que le condena?. Si contra nuestro parecer hubiera sido aprobado el trayecto por el Araxes y a algunos nos diera por dinamitar ese tramo, ¿habrían de permitirnos actuar impunemente?. ¿Aún desconocen que no hay sociedad posible sin un monopolio público de la violencia legítima y que, en principio, cualquier otra coacción física tendrá que buscar muy poderosas razones para justificarse?.

Les trae sin cuidado. A ellos les satisface su autoconciencia de ser un nuevo *movimiento social*, que viene a subsanar los vicios inherentes a toda democracia capitalista de competencia entre partidos. Semejante convicción les otorga, por lo visto, una especie de salvoconducto para sostener cualquier planteamiento y emprender cualquier acción. Pues bien, apresurémonos a reconocer que los llamados movimientos sociales (ecologistas, pacifistas, feministas, vecinales...), en general y por sus efectos externos, son de naturaleza democrática. En su corta historia, han mostrado con creces su capacidad de ampliar el estrecho margen que el sistema electoral y el juego

parlamentario suelen reservar al tratamiento de graves demandas ciudadanas. Sólo que sus logros, acompañados de las lógicas tensiones, no han sido fruto de la violencia física ni mucho menos del apoyo de grupos armados. Les bastaba conectar con necesidades sentidas más o menos universalmente en su sociedad. ¿Puede decir otrotanto nuestra Coordinadora?. En cambio, ni su habitual carencia de teoría, ni lo carismático de sus procedimientos internos constituyen los mejores avales democráticos de estos movimientos. Son estos lastres los que, en mayor o menor medida, les pueden acercar a métodos corporativos de presión y a defender como generales intereses netamente particulares. Y ése sería un buen objeto de meditación para la Coordinadora Lurralde.

A menos que se contenten con predicar, como panacea universal de todos nuestros males políticos, una *democracia participativa* de la que ellos serían sus adelantados. Nuestro tiempo propone ciertamente retos a los que no cabe responder con un credo democrático aprendido de oídas; pero tampoco, claro está, con la soflama contraria recitada de carrerilla. Ambos simplismos pasan por alto que el modelo democrático comprende su legalidad tanto como la pregunta por su legitimidad, su forma y su contenido, su riqueza y sus limitaciones. De modo que ningún individuo ni régimen político alguno serán nunca demócratas del todo. Valga, pues, este primer mandamiento para todo ciudadano: no invocarás el nombre de "democracia" en vano.

Soy de los convencidos de que, para recuperar una moral pública -que eso es, entre otras cosas, la política-, se hace preciso inventar de continuo la intervención ciudadana en el poder. Que venga así enhorabuena esta forma superior de democracia, por más que de ella apenas contemos con teoría y no tengamos constancia en la historia. La verdad es que uno de sus impulsores más renombrados (Macpherson) considera su combinación con el sistema de partidos no sólo probable, sino incluso deseable. Tengan en cuenta, con todo, nuestros coordinadores que esa fórmula quedaría expuesta a las mismas infundadas "objeciones" que ellos dirigen a la democracia parlamentaria. Un sistema participativo, y puesto que sus actores -al menos en instancias superiores de gobierno- deberían ser también representativos (de su empresa, barrio, ciudad, etc.), no podría librarse de algún mecanismo electoral. En una democracia así, los que más participasen "se impondrían" sobre los apáticos, la mayoría de los participantes tendrían derecho sobre la minoría y, desde luego, se reprimiría aún más legitimamente con la fuerza estatal todo género de disidencia violenta. Cambiarían muchas cosas, y a mejor, pero no precisamente ésas. Eso sí, junto a un minucioso

control de los actos del Gobierno, habría otra ganancia pública inmediata. Pues ¿cuántas reivindicaciones como las de ésta y otras Coordinadoras de nuestros días iban a resistir de verdad la prueba de una mayor transparencia ante toda la ciudadanía interesada?

Ahora bien, el último misterio penoso con el que aquí topamos es el de cuadrar este espíritu participativo-popular con el papel decisorio que la Coordinadora atribuye a los técnicos. Uno pensaba que, tal vez por la creciente complejidad de la cosa pública, la política contemporánea iba perdiendo su auténtico talante a fuerza de degradarse en techné. Que en buena medida los políticos se habían mudado en expertos de lo general que a su vez confiaban los asuntos parciales en expertos más especializados. Y que semejante primacía del aparato tecnocrático era una de las causas del alejamiento de la gran masa de ciudadanos respecto del proceso de toma de decisiones. Uno suponía asimismo que, puestos a buscar técnicos, mejor y mejores los puede encontrar por lo común quien administra el poder que los administrados...

¿Habrá que conceder que tales suposiciones no son sino falsas alarmas?. Aun así, si mantuviéramos la neutralidad moral de la técnica, siempre tendríamos que remitirnos a una opción final de carácter político. Si mantenemos empero que no hay tecnología que no sea en algún grado ya ideología, menos aún consentiremos en dejar nuestro destino colectivo en manos de los peritos. Desde diversos parámetros de valor, las soluciones de los entendidos por fuerza habrán de diferir. Pero es que ante un mismo criterio de valor (verbigracia, la defensa del medio ambiente), las opciones técnicas también pueden variar (Leizarán, Arexes, Berástegui...). En tal caso de discrepancia entre los técnicos, ¿encargaremos el veredicto definitivo a un supertécnico (y quién y cómo lo reconocerá y nombrará)?. ¿O habrá que recurrir de nuevo, por la vía más adecuada, a la voluntad de la mayoría?. De modo que, para propiciar una verdadera participación, no parece bueno ni posible desembarazarse de la política en general ni de la política representativa en particular.

Nuestra Coordinadora no entra en minucias y propone en toda regla la creación de una *Comisión Arbitral* para dirimir los conflictos medioambientales y territoriales que puedan brotar en la comunidad foral. Se hace difícil entender el entusiasmo que este proyecto de ley ha despertado entre sus autores. De "propuesta innovadora" la califican. Y desde luego lo es tanto que, a fin de fomentar la intervención de los ciudadanos en los asuntos públicos, su Junta permanente se compondría de una mitad

de técnicos. Sería tan expresiva de los intereses e ideologías de la población que, al lado de dos delegados de los grupos ecologistas (de méritos indudables, pero en todo caso designados por cooptación), se sentarían por gentil concesión otros dos representantes del Gobierno (que se sepa, mejor o peor, los únicos elegidos por cauces reconocidos). Francamente, más que arbitral, se diría que estamos ante una Comisión arbitraria.

Con santa humildad la proclaman "iniciativa vanguardista". Si será vanguardista que esta Comisión se autoerigirá en árbitro, en juez último de las partes enfrentadas. Lo mismo se constituye en "órgano con competencia suficiente para dictaminar entre los proyectos" alternativos y oficiales, como se arroga capacidad para suspender la ejecución de todo plan que le sea recurrido. O lo que es igual, Parlamento y Gobierno de Navarra quedan suplantados y sometidos -por ahora, sólo en materias ecológicas- a la autoridad de esta Comisión. Una Comisión tan popular, en fin, que le bastan mil firmas (o sea, el respaldo de *menos del 0'2 por ciento de los navarros*) para iniciar su supremo arbitraje. Así que todos felices, y que Dios reparta suerte en medio del guirigay. Para que vean lo sencillo que resulta la conversión de una democracia representativa en una democracia participativa.

En pocas palabras, la Comisión Arbitral de Conflictos medioambientales sería sin duda bastante más conflictiva que los conflictos que se propone apaciguar. Hay para sorprenderse, pues, de que entre los promotores de tamaña iniciativa legal figuren ciertos hombres al parecer versados en leyes. Pero es que hacerse pasar por gente crítica y rebelde cuesta su precio, no se vayan a pensar... Los de la generación del 68 comprendimos que, para ser realistas, había que pedir lo imposible; ahora parece que, para devaluar la utopía, hay que exigir directamente el absurdo.

Hasta el momento la Coordinadora Lurraldeha ha conseguido, según los casos, asustarnos o maravillarnos. De permanecer anclada en su teoría y aferrada a sus prácticas, le va a costar más trabajo convencernos.